

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACIÓN - SENTENCIA	
DEMANDANTE	MARÍA EUGENIA JIMENEZ JIMENEZ
DEMANDADOS	COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A.
RADICADO	05088-31-05-001-2020-00154-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Ineficacia del acto de traslado de régimen pensional
DECISIÓN	Adiciona y Confirma

*Medellín, diecisiete (17) de junio de dos mil veintidós (2022)*

*Estudiado, discutido y aprobado en sala virtual*

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto en la Ley 2213 de 2022 que dispuso adoptar como legislación permanente las normas contenidas en el Decreto Ley 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por la señora **MARÍA EUGENIA JIMENEZ JIMENEZ** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** y la **AFP PROTECCIÓN S.A.**

Después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 026**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

## **I. – ASUNTO**

Es materia de la Litis, decidir el recurso de apelación interpuesto por PROTECCIÓN S.A. contra la sentencia que profirió el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bello - Antioquia, en la audiencia pública celebrada el día 6 de abril de 2022; y a su vez conocer dicha sentencia en Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones, de conformidad al artículo 69 del CPT y SS.

## **II. – HECHOS DE LA DEMANDA**

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que, la demandante se afilió al régimen de prima media con prestación definida administrado por el entonces Instituto de los Seguros Sociales desde febrero de 1990; posteriormente, en diciembre de 1997, se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad, a través de la AFP PROTECCIÓN S.A., donde permanece actualmente.

Se duele que los asesores ejecutivos del RAIS no le brindaron la información suficiente para haber tomado la decisión pertinente con la información determinante y ajustada a su situación concreta; y que, al contrario, le ocultaron información relevante al momento de ser atendida para afiliarse a PROTECCIÓN S.A., por lo que considera que su decisión se encuentra viciada y afectada en su validez, por ausencia del conocimiento sobre las consecuencias jurídicas de su traslado de régimen pensional.

## **III. – PRETENSIONES**

La acción judicial está dirigida a que se declare la ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad adelantado por PROTECCIÓN S.A., y que en consecuencia, se ordene a dicha administradora trasladar a COLPENSIONES la totalidad del saldo de su cuenta de ahorro individual, debiendo ordenar a esta última entidad recibir dichas sumas y aceptar a la

demandante en el régimen de prima media con prestación definida sin solución de continuidad, condenando a las demandadas a reconocerle las costas procesales del juicio.

#### **IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA**

Una vez admitida la demanda, fue debidamente notificada, procediendo las demandadas\_a descorrer el traslado de esta acción.

COLPENSIONES, a través de la contestación allegada (PDF 3 del expediente digital), se opuso a la prosperidad de las pretensiones de esta acción; indicó que no le constan los hechos de la demanda, y; propuso las excepciones perentorias que denominó *“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, PRESCRIPCIÓN, INOPONIBILIDAD DE LA RESPONSABILIDAD DE LA AFP ANTE COLPENSIONES EN CASOS DE INEFICACIA DE TRASLADO DE REGIMEN, IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS, BUENA FE y la EXCEPCIÓN INNOMINADA”*.

PROTECCIÓN S.A. descorrió el traslado de la acción, según se observa a folios 99 y siguientes del PDF 1 del expediente digital. A través de dicha respuesta negó los hechos de la demanda, salvo la afiliación de la actora a esa administradora, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y, formuló las excepciones perentorias que denominó *“Inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, Buena fe, Prescripción, Aprovechamiento indebido de los recursos públicos y del Sistema General de Pensiones, Reconocimiento de la restitución mutua de la AFP: inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa”*, entre otras.

## **V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA**

En audiencia pública celebrada el 6 de abril de 2022, la Juez de conocimiento accedió a las pretensiones de la demanda, declarando la ineficacia de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad a través de PROTECCIÓN S.A., y le impuso la obligación de trasladar a COLPENSIONES, los dineros contenidos en la cuenta de ahorro individual de la asegurada con sus respectivos rendimientos financieros, incluyendo todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación de la demandante, tales como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora y cuotas de administración.

A COLPENSIONES le ordenó aceptar el retorno de la demandante, recibir las mencionadas sumas, activar su afiliación a prima media sin solución de continuidad, actualizando su historia laboral y continuar siendo su administradora de pensiones.

Condenó en costas procesales únicamente a PROTECCIÓN S.A., absteniéndose de hacerlo frente a COLPENSIONES.

El principal argumento de la A quo para declarar la ineficacia, desarrolló toda la tesis jurisprudencial que en la actualidad sostiene la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia, sobre la inversión de la carga de la prueba, la insuficiencia del formulario para acreditar asesoría, la relevancia de la oportunidad en que se reciba la asesoría, la imposibilidad de que la ineficacia se sanee por prescripción o por traslados en el mismo régimen de ahorro individual con solidaridad y el derecho a la libre selección de régimen pensional.

## **VI. – RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

La sentencia de primera instancia fue apelada por PROTECCIÓN S.A., quien recurrió la decisión de manera parcial, únicamente en cuanto ordenó a la entidad trasladar las comisiones de administración y las primas de seguros

previsionales. Lo sustentó afirmando que estos rubros están plenamente autorizados por el legislador en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, que se trata de sumas que están autorizadas en ambos regímenes pensionales, compensan la actividad de administración del fondo que resultó generadora de rendimientos financieros, y estima que ordenar su devolución configuraría un enriquecimiento injustificado en favor de Colpensiones porque estaría recibiendo una comisión que no estaría siquiera destinada a financiar la pensión de vejez.

Insistió en que la entidad se encuentra facultada para conservar el valor de estos descuentos, como compensación a su actividad de administración de la cuenta de ahorro individual de la asegurada.

Citó el Decreto 2555 de 2010 a efectos de destacar que las AFP son vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, para a su vez reseñar que esta entidad ha precisado que cuando se declara la ineficacia de las afiliaciones se debe devolver únicamente el valor de los aportes que se encuentren en la cuenta de ahorro individual, los rendimientos financieros y el valor de los porcentajes por fondo de garantía de pensión mínima.

En el caso de las primas previsionales, reseñó que la citada autoridad administrativa ha aclarado que el valor pagado a título de dichas primas ya fue debidamente ejecutoriado y pagado a terceros con quienes se contrató la cobertura, y que PROTECCIÓN S.A. estaría imposibilitada para recobrar esas sumas.

Solicitó que se declare la prescripción sobre la obligación de devolver las primas previsionales y las cuotas de administración, al tratarse de conceptos que no financian la pensión y sobre los cuales sí opera dicho fenómeno.

### **Alegatos de Conclusión:**

En la debida oportunidad procesal, el apoderado judicial de COLPENSIONES, Dr. SANTIAGO GÓMEZ GAVIRIA portador de la T.P. N°

342.104 del C.S. de la J., a quien se le reconoce personería para actuar en los términos del memorial de sustitución poder allegado al plenario, presentó alegatos de conclusión, a través de los cuales insistió en la improsperidad de la declaratoria judicial de ineficacia del traslado, al estimar que la actora no logró demostrar los supuestos vicios del consentimiento por ella aducidos.

También afirma que en aquellos eventos donde se declara la nulidad y/o ineficacia del traslado (según se advierte en las sentencias CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989, CSJ SL17595-2017, CSJ SL4989-2018 y CSJ SL1421-2019, rad. 56174) hay lugar a reintegrar la totalidad de la cotización, es decir: i) Recursos cuenta individual de ahorro, ii) Cuotas abonadas al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, iii) Rendimientos, iv) Anulación de Bonos Pensionales v). Porcentaje destinado al pago de Seguros Previsionales y gastos de administración.

Teniendo en cuenta la anterior crónica procesal, se pasa a resolver de fondo, previas las siguientes

## **VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL**

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica procesal, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

**Naturaleza jurídica de la pretensión.- La Ineficacia en el traslado de régimen pensional.-**

El objeto central de esta Litis, se extiende a los puntos objeto de inconformismo planteados por la apoderada judicial de PROTECCIÓN S.A en su recurso de apelación, sin embargo, esta Sala se encuentra facultada para

revisar todos los aspectos de la condena a Colpensiones relacionada con la declarada ineficacia de traslado de régimen pensional y la aceptación de la demandante en el régimen de prima media con prestación definida que administra, en virtud de la competencia de que se dispone conforme al artículo 69 del CPT y SS., en Grado Jurisdiccional de Consulta.

Partirá la Sala de establecer si el traslado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad, que realizó la demandante, a través de la AFP PROTECCIÓN S.A. alcanzó o no a producir los efectos jurídicos respectivos.

Sea lo primero referir que la libre escogencia de régimen pensional y el traslado entre regímenes que en tal virtud se efectúe, tiene como presupuesto esencial, el absoluto conocimiento del asegurado sobre las consecuencias jurídicas que se puedan derivar del cambio de régimen pensional, el cual ha de venir suministrado y garantizado por el agente adscrito al respectivo fondo, esto es, es de la propia esencia del acto de traslado, el suministro cabal y absoluto de toda la información, incluyendo el asesoramiento sobre todas las implicaciones pensionales y consecuencias que para el caso concreto pueden darse, ya que se trata de una decisión relevante de la cual depende el futuro pensional del asegurado.

Esto lleva a la Sala a advertir que las obligaciones de asesoría no fueron creadas por el Legislador a través de recientes normas, sino que desde la propia concepción dualista de dos regímenes pensionales a través de la Ley 100 de 1993, se establecieron como de su propia esencia.

Así, la asesoría a cargo de la administradora, se erige en una obligación insoslayable, teniendo en cuenta la trascendencia e importancia de los efectos económicos que puede representar una decisión de tal naturaleza.

En términos generales, es preciso referir que la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha venido desarrollando la tesis sobre la ineficacia del traslado entre regímenes pensionales, y a través

de las sentencias SL 1452 del 3 de abril de 2019 y SL 1688 del 8 de mayo de 2019, ha consolidado su línea jurisprudencial, la cual venía desarrollándose –en su orden- a través de las Sentencias SL 31.989 del 8 de septiembre de 2008, SL 33.083 del 22 de noviembre de 2011, SL 46.922 del 3 de septiembre de 2014, SL 19.447 del 27 de septiembre de 2017, y SL 17.595 del 18 de octubre de 2017, decantando que el deber de información es ineludible; que este tema a nivel procesal se rige por condiciones probatorias que le imponen a la respectiva administradora de pensiones acreditar en el juicio que en cada caso concreto sí adelantó la respectiva asesoría; que el primer acto de voluntad es el que se juzga como determinante para la producción de efectos jurídicos en el traslado de régimen pensional, sin que exista la posibilidad de saneamiento de la ineficacia, por asesorías posteriores que se hubieren brindado a los asegurados, después de haber tomado la decisión inicial; que la simple suscripción de un formulario de traslado no denota un proceso serio y cabal de asesoría; no es necesario ni que el asegurado se encuentra ad portas de consolidar el derecho pensional, ni que necesariamente tenga que tener el beneficio del régimen de transición, y; que la prescripción no opera en asuntos en los que se encuentra involucrada la formación del derecho a la pensión.

Es importante destacar que, el primer acto de voluntad que se juzga como determinante para la producción de efectos jurídicos en el traslado de régimen pensional, sin que exista la posibilidad de saneamiento de la ineficacia, por asesorías posteriores que se le brinden al asegurado, después de haber tomado la decisión inicial, o por el hecho de que el asegurado se haya trasladado incluso entre varias administradoras pertenecientes al régimen de ahorro individual con solidaridad, ya que *“la oportunidad de la información se juzga al momento del acto jurídico del traslado, no con posterioridad, por lo que un dato será relevante si es oportuno, es decir, si al momento en que se entrega brinda al destinatario su máximo de utilidad”* (Sentencia CSJ SL 1688 de mayo de 2019).

A partir de lo anterior, pasa a desatarse la alzada conforme al...



## **CASO CONCRETO**

Sea lo primero reseñar, que conforme a la prueba documental obrante en el PDF 1 del expediente digital, se comprueba que la señora MARÍA EUGENIA JIMENEZ JIMENEZ, se afilió al régimen de prima media con prestación definida administrado por el entonces Instituto de los Seguros Sociales desde febrero de 1990; posteriormente, en diciembre de 1997, se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad, a través de la AFP PROTECCIÓN S.A., donde permanece actualmente.

Ahora, revisadas en detalle las consideraciones de la A quo para arribar a la decisión de declarar la ineficacia del traslado de régimen pensional de la actora, esta Sala encuentra que las mismas se encuentran ajustadas al sentido de la jurisprudencia nacional, y consultan las particularidades del caso, teniendo en cuenta que la AFP convocada a juicio (PROTECCIÓN S.A.) no alcanzó a probar haberle brindado asesoría a la actora con suficiencia en su proceso de traslado, en el momento en que la atendió para afiliarla.

Ahora, como lo ha decantado pacíficamente la jurisprudencia del órgano de cierre (Sentencias SL 31.989 del 8 de septiembre de 2008, SL 33.083 del 22 de noviembre de 2011, SL 46.922 del 3 de septiembre de 2014, SL 19.447 del 27 de septiembre de 2017, y SL 17.595 del 18 de octubre de 2017), es claro que la firma del formulario de afiliación no es una prueba certera de que hubiere existido un verdadero cumplimiento por parte de los fondos privados. La simple firma del formulario por parte del asegurado no puede tenerse como una prueba de que se le haya informado a cabalidad de todos los pormenores que le implicaban el cambio de régimen, y por ello el acto jurídico terminó afectado en su eficacia.

Es importante destacar que el derecho a la libre elección de régimen pensional contenido en la Ley 100 de 1993 en el marco del derecho a la seguridad social no riñe con las disposiciones legales que contemplan la exigencia del formulario, debiéndose entender que, más allá de la documentación formal, existe un sustrato material directamente relacionado con

los derechos fundamentales que exige que el asegurado tenga una completa asesoría en su proceso de traslado de régimen pensional, la cual coloca a la respectiva administradora en el pleno del cumplimiento de sus obligaciones profesionales en ese sentido, bajo la dinámica del *“buen consejo”*.

En consecuencia, **se confirmará** la sentencia de primera instancia, al haber declarado la ineficacia del traslado de la señora MARÍA EUGENIA JIMENEZ JIMENEZ dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad.

Bajo el anterior escenario, la situación pensional de la demandante, retorna al mismo estado en que se encontraba antes de suscribir el acto ineficaz de traslado a la AFP PROTECCIÓN SA., esto es, se encuentra válidamente afiliada al RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA, administrado en la actualidad por COLPENSIONES.

El tema de las devoluciones económicas es pertinente revisarlo en virtud de la competencia en Grado Jurisdiccional de Consulta de que dispone este colegiado, que impone la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera de la entidad pública codemandada que será quien asuma las futuras prestaciones económicas de la seguridad social que deban pagársele a la demandante. A su vez, este tema constituye punto de disenso en la apelación de PROTECCIÓN S.A.

Esta sala encuentra que, a la entidad pública co demandada COLPENSIONES, debe garantizársele la integridad de la cotización sin descuento alguno, ya que será quien reciba la afiliación de la asegurada y para todos los efectos legales la tenga afiliada al fondo público sin solución de continuidad. No puede perderse de vista que COLPENSIONES es la entidad que a futuro deberá asumir el pago de las prestaciones de la seguridad social que llegue a causar, y deberá asumir la afiliación sin solución de continuidad en el tiempo.

Si bien, el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 establece la facultad que tienen las administradoras de descontar los gastos de administración y demás

descuentos, ello opera en el marco de un traslado que no adolezca de eficacia, esto es, que se trate de una pertenencia al régimen legítima que no sea ineficaz. Así, en actos jurídicos que conserven su validez y se hayan realizado en condiciones ordinarias con la garantía del buen consejo, el acompañamiento y la asesoría, es evidente que dichos descuentos pueden realizarse y no existiría lugar a devolverlos. No obstante, mientras el acto sea ineficaz, se encuentra justificado el retorno económico global de todo lo que se hubiere generado en virtud de ese acto que no nació a la vida jurídica.

Los efectos de la ineficacia se traducen en el hecho de que las cosas deban retornar al estado anterior, resultando intrascendente que la actora haya percibido unos rendimientos financieros a partir de la gestión administrativa de PROTECCIÓN S.A., en tanto COLPENSIONES no tiene por qué ver diezmada la cotización, ya que los referidos descuentos también existen en el régimen de prima media con prestación definida, y no deben ser realizados por PROTECCIÓN S.A., sino por COLPENSIONES, que es donde siempre ha permanecido afiliada la actora. Desde este punto de vista, no es cierto, como lo hace ver la apoderada judicial de PROTECCIÓN S.A., que en este caso se esté generando un enriquecimiento sin causa en favor de COLPENSIONES, por el simple hecho de recibir unas sumas que, en condiciones normales, debió haber percibido.

Al respecto, resulta oportuno citar el reciente criterio de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien, en sentencia del 29 de julio de 2020, SL 2877, Radicación 78.667, MP. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, ha recordado que *“la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida...”*.

Ahora, en cuanto a la solicitud de que se aplique la prescripción extintiva sobre la obligación de traslado de los descuentos realizados, esta sala no accede a lo solicitado, teniendo en cuenta que, si bien las referidas sumas no

están destinadas a financiar la pensión de vejez, lo cual las excluiría del carácter imprescriptible propio de la pensión y de todo lo relacionado con su formación, no es menos cierto que es en esta sentencia que se está declarando la ineficacia con la imposición de las obligaciones consecuenciales a la misma, por lo que no hay lugar a hablar de la extinción de la obligación por transcurso del tiempo, como quiera que están obligaciones derivan de una sentencia que incluso no se ha ejecutoriado. Además de lo anterior, la ineficacia equivale a una completa ausencia de efectos jurídicos del acto, lo cual supone que todos los efectos deben regresar al estado anterior.

Es de tal relevancia el principio de sostenibilidad financiera y la importancia de que el mismo no se vea limitado por omitir ordenar retornar todos los descuentos que le hicieron a la cotización, que esta sala advierte que la orden dada por la A quo en el numeral 2º de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia resulta insuficiente, ya que también debe ordenarse a PROTECCIÓN S.A. que, además de trasladar a COLPENSIONES el valor de la cuenta de ahorro individual de la demandante con sus respectivos rendimientos, cuotas de administración y primas previsionales, también deba trasladar los porcentajes del fondo de garantía de pensión mínima, que efectúe la respectiva actualización monetaria de la indexación a las cuotas de administración, las primas previsionales y los porcentajes del fondo de garantía de pensión mínima, que el traslado de los recursos ordenados se haga dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia y que, discrimine los conceptos y rubros que se ordenó devolver.

En consecuencia, **se confirmará** la decisión de la A quo de ordenar a PROTECCIÓN S.A. trasladar a COLPENSIONES las sumas que se encuentren en la cuenta de ahorro individual de la afiliada con sus respectivos rendimientos, la cuotas de administración y las primas previsionales y, **se adicionará** el numeral 2º de la parte resolutive de la sentencia, a efectos que PROTECCIÓN S.A., también traslade los porcentajes del fondo de garantía de pensión mínima, que pague la indexación calculada hasta el momento del traslado de los recursos sobre las cuotas de administración, las primas previsionales y los porcentajes de garantía de pensión mínima, que dichos

traslados los realice dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia y que, al momento de cumplir la orden impartida, remita a Colpensiones la relación discriminada de los conceptos, con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

### **COSTAS PROCESALES DE SEGUNDA INSTANCIA**

En esta instancia se han causado costas procesales, a cargo de PROTECCIÓN S.A. por resultar vencida en el recurso, y en favor de la señora MARÍA EUGENIA JIMENEZ JIMENEZ. Agencias en derecho: 1 salario mínimo legal mensual vigente para 2022.

### **VIII. - DECISIÓN.**

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

### **RESUELVE:**

**PRIMERO: ADICIONAR** el numeral 2º de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia, a efectos de que, **PROTECCIÓN S.A.**, traslade a **COLPENSIONES**, además de las sumas ordenadas, también traslade los porcentajes del fondo de garantía de pensión mínima, que pague la indexación calculada hasta el momento del traslado de los recursos sobre las cuotas de administración, las primas previsionales y los porcentajes de garantía de pensión mínima, que, al momento de cumplir la orden impartida, remita a Colpensiones la relación discriminada de los conceptos, con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen y que el traslado de estos recursos lo realice dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

**SEGUNDO: CONFIRMAR** dicha sentencia en todo lo demás, de conformidad a lo expuesto.

**TERCERO: CONDENAR** en costas procesales de segunda instancia a **PROTECCIÓN S.A.** y en favor de la señora **MARÍA EUGENIA JIMENEZ JIMENEZ**. Agencias en derecho: 1 SMLMV para 2022, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

**CUARTO:** En su oportunidad procesal, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

**QUINTO: SE ORDENA** la notificación por **EDICTO** de esta providencia, que se fijará por secretaría por el término de un día, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

**Los magistrados**

  
**MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**  
Magistrada

  
**ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**  
Magistrado

  
**LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL**  
Magistrada